



1

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN CUARTA
ROLLO 142/14

DILIGENCIAS PREVIAS 85/14
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 6

ILMOS SRES:

D^a ANGELA MURILLO BORDALLO
D^a CARMEN-PALOMA GONZALEZ PASTOR (Ponente)
D. JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO

AUTO N° 153/15

En Madrid, a veintisiete de abril de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- Por el Juzgado Central de Instrucción n°6, se incoaron Diligencias previas 85/14 por los delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública en el que se encuentra imputado el ahora recurrente **DAVID MARJALIZA VILLASEÑOR**, respecto del que se acordó su prisión el 31 de octubre de 2014.

Con fecha 02/03/2015, se solicitó por su representación legal su puesta en libertad, con o sin fianza, resuelta en sentido negativo para el peticionario en auto de 23/03/2015.

Notificada la citada resolución se interpuso recurso de apelación y se formó el oportuno testimonio de particulares que fue remitido a esta sección, donde tuvo entrada el 22/04/2015 formándose el rollo de apelación.

Mediante diligencia del propio 22/04/2015 se acordó como fecha de la deliberación del recurso el 24/04/2015, quedando los autos pendientes de dictar la oportuna resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Discrepa la representación legal del recurrente de la decisión adoptada por el instructor judicial, de forma sucinta, por entender que no concurren los requisitos legales necesarios para adoptar la medida de prisión vigente, por los argumentos siguientes: 1º.- En primer término, los delitos imputados no reúnen el calificativo de graves desde el punto de vista penal e incluso podría decirse que la imputación es prematura; 2º.- En segundo lugar, se alega que el recurrente coadyuvó a la investigación y puso a disposición de las autoridades de la Administración Tributaria determinadas cuentas existentes en Suiza; 3º.- En tercer término, se indica que otros delitos como el de cohecho o contra la Administración Pública, no ha dado lugar a que se decretara la prisión con respecto a otros implicados; 4º.- En cuarto lugar, no se han tenido en cuenta las circunstancias de arraigo, tales como tener esposa e hijo de corta edad, arraigo profesional y social; 5º.- En quinto término, se niega la inexistencia de riesgo de ocultación de pruebas u obstrucción a la investigación y finalmente, por entender que la medida acordada resulta, en definitiva, desproporcionada.

Las alegaciones indicadas no son aceptadas en esta alzada.

SEGUNDO.- Con motivo del traslado del recurso al Ministerio Fiscal, éste expone en su informe emitido el 9 de abril que las investigaciones que se están llevando a cabo

están evidenciando que existen nuevos datos que ponen de manifiesto la necesidad de la medida cautelar impugnada.

Entre ellos, la presunta connivencia del recurrente con un grupo de empresarios del ramo de la construcción con importante capacidad de influencia sobre determinados políticos locales de Valdemoro y alrededores que dieron lugar a un volumen millonario de beneficios. También menciona el informe la subsistencia de diversas líneas de investigación plenamente vigentes que podrían verse afectadas si se dejara sin efecto la prisión del recurrente ya que podría dar lugar a la ocultación de pruebas.

Por su parte, el auto impugnado hace mención a que los delitos imputados al recurrente, además de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública ya mencionados, se extienden al de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación de documento público u oficial, y organización criminal. Además, hace mención en el auto que todavía no han podido conocerse todas las empresas utilizadas o vinculadas al recurrente, entre las que figuran más de 150.

TERCERO.- A la vista de lo expuesto, a la hora de resolver sobre el recurso presentado, y dando respuesta a cada una de las cuestiones expuestas por el recurrente, procede precisar que, en contra de lo expuesto en el recurso, entiende el tribunal que concurren sobradamente los requisitos legales necesarios para el mantenimiento de la medida impugnada, por cuanto, la relación de los delitos imputados no son sólo los expuestos en el recurso, sino los expresamente recogidos en el auto impugnado, y si bien la mayoría no reúnen el calificativo de grave, en términos penológicos, sí revisten el referido carácter si se tiene en cuenta la labor profesional del recurrente y la cantidad de implicados y sociedades utilizadas.

En cuanto a su colaboración con la Administración de justicia al haber coadyuvado en lo que afecta a la Comisión Rogatoria de las autoridades Suizas, al no hacerse mención alguna en el auto a tal extremo, se desconoce el alcance de la actuación desplegada por el recurrente.

Por lo que afecta a que el Ministerio Fiscal no ha interesado la prisión de otros encartados con semejante grado de presunta actividad penal, cabe decir que este tribunal no efectúa comparaciones entre unos y otros acusados, limitándose a resolver cada uno de los recursos de forma separada.

En relación al arraigo, dando por válidos y acreditados los datos acerca del arraigo personal, familiar y social del recurrente, la investigación del entramado societario que prima facie aparece en las actuaciones sigue adelante existiendo, según indican, tanto el Ministerio Fiscal, como el propio juez instructor, no sólo un elevado riesgo de evadir la acción de la justicia, sino también de ocultar datos que permitan conocer con profundidad el alcance de su participación delictiva, datos todos ellos a través de los que el tribunal llega al convencimiento de la legitimidad del mantenimiento de la privación de libertad del recurrente en tanto no se conozca con más detalle la participación delictiva en los hechos que ya han sido investigados y los que están en fase de investigación.

En consecuencia, y por las razones expuestas, entiende el tribunal que la medida no es desproporcionada, por lo que procede la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Desestimar el recurso de apelación presentado por la procuradora D^a Esther Gómez de Enterría, en representación legal de **DAVID MARJALIZA VILLASEÑOR**, frente al



5

auto de 23/03/2015 dictado por el Juzgado central de instrucción nº 6 en la pieza separada del citado, que se confirma íntegramente.

Así por este auto, lo acordamos, mandamos y firmamos.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario.